



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-024-2021-00485-01
Demandante: Jesús Afrany Urán Montoya
Demandada: Colpensiones E.I.C.E.
Asunto: Apelación y Consulta de Sentencia
Procedencia: Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín
M. ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Pensión de Sobrevivencia:
Cónyuges separados de hecho - Causante pensionada

Medellín, agosto dieciocho (18) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones E.I.C.E., respecto de la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Jesús Afrany Urán Montoya contra Colpensiones E.I.C.E., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-05-024-2021-00485-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor Jesús Afrany Urán Montoya instauró demanda ordinaria laboral contra Colpensiones E.I.C.E. pretendiendo el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia que se causó por el fallecimiento de su cónyuge, la pensionada María Isabel Buitrago Arboleda; y el consecuencial pago de las mesadas comunes y adicionales que se hubieren causado desde el 27 de abril de 2021, con los intereses de mora, o en subsidio la indexación y las costas del proceso.

En respaldo de tales pedimentos el señor Jesús Afrany Urán Montoya expuso que contrajo matrimonio con la señora María Isabel Buitrago Arboleda el 20 de noviembre de 1999; que su esposa fue pensionada por Colpensiones E.I.C.E., por el riesgo de la vejez, mediante al Resolución SUB 32248 del 10 de febrero de 2021, a partir del día 01 del mismo mes y año, con una mesada equivalente a un (1) SMLMV; y que aquella falleció el 27 de abril de 2021.

Adujo que compartió techo, lecho y mesa por más de quince (15) años con la señora María Isabel Buitrago Arboleda, pero diferencias en la convivencia separaron sus residencias en noviembre de 2015, sin que en ningún momento hubieren perdido el ánimo familiar, en la medida en que mantuvieron la vocación de familia, y no cesaron las obligaciones que les asistían como esposos, esto es, se ayudaron y socorrieron mutuamente hasta el momento en que falleció la causante.

Informó que solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de su cónyuge, la pensionada María Isabel Buitrago Arboleda, petición que fue despachada desfavorablemente a través de la Resolución SUB 183997 del 05 de agosto de 2021, por no haber acreditado el requisito de convivencia durante los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento de la causante (doc.02, carp.02).

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado legalmente constituido, **Colpensiones E.I.C.E.** admitió que la señora María Isabel Buitrago Arboleda contrajo matrimonio con el señor Jesús Afrany Urán Montoya el 20 de noviembre de 1999, fue pensionada por el riesgo de vejez mediante la Resolución SUB 32248 del 10 de febrero de 2021, y falleció el 27 de abril de 2021.

También asintió que el señor Jesús Afrany Urán Montoya, en calidad de cónyuge superviviente, le solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de la pensionada María Isabel Buitrago Arboleda., prestación que fue denegada a través de la Resolución SUB 183997 del 05 de agosto de 2021, porque no acreditó el tiempo mínimo de convivencia previo al fallecimiento.

Aseveró que el actor no acredita los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia para ser beneficiario de la prestación pensional deprecada, en tanto admitió haber suspendido la convivencia con la causante desde noviembre de 2015, de lo que se infiere, que no convivió con la pensionada durante los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento.

De consiguiente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y de fondo excepcionó inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión de sobrevivencia; imposibilidad de aplicar el precedente judicial y la inversión de la carga de la prueba; prescripción; compensación; buena fe; imposibilidad de condena en costas; y la excepción genérica o innominada (doc.05, carp.01).

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 13 de julio de 2023, declaró que el señor Jesús Afrany Urán Montoya es beneficiario de la pensión de sobrevivencia que se causó con ocasión del fallecimiento de la pensionada María Isabel Buitrago Arboleda; condenó a

Colpensiones E.I.C.E. a reconocer la prestación pensional causada en favor del demandante, a partir del 28 de abril de 2021, en cuantía equivalente a un (1) SMLMV, en razón de 13 mesadas al año, con un retroactivo pensional liquidado hasta el 30 de junio de 2023 por la suma de \$28.227.587, sobre la cual autorizó descontar los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud; condenó a Colpensiones E.I.C.E. a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 16 de agosto de 2021, y hasta el pago efectivo de la obligación; y condenó en costas a Colpensiones E.I.C.E., en favor del demandante (doc.17, carp.01).

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada judicial de la **Colpensiones E.I.C.E.** impetró el recurso de alzada procurando que se revoque íntegramente el fallo de primer grado, y en su lugar, se absuelva a su representada de las pretensiones incoadas, sustentando que para el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, en tratándose de un(a) causante pensionado(a), o de una sustitución pensional, es necesario acreditar convivencia con el causante durante los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento, exigencia que el demandante no acreditó respecto de la señora María Isabel Buitrago Arboleda, y por ello, no le asiste la calidad beneficiario de la prestación pensional deprecada (minuto 00:22:50, doc.16, carp.01).

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para alegar de conclusión, ninguna de las partes formuló pronunciamiento.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que fueron objeto de apelación por **Colpensiones E.I.C.E.**, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad social, respectivamente.

De igual forma procede la consulta en favor de la entidad pública, en los puntos que no fueron objeto de alzada, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que la señora María Isabel Buitrago Arboleda nació el 09 de febrero de 1955 (págs.195-196, doc.02, subcarp.05, carp.01); contrajo matrimonio católico con el señor Jesús Afrany Urán Montoya el 27 de abril de 2021 (págs.17-18, 19, doc.02, carp.01); fue pensionada por el riesgo de la vejez, mediante la Resolución SUB 32248 del 10 de febrero de 2021, a partir del día 01 del mismo mes y año, con una mesada inicial de \$908.526 (págs.262-267, doc.02, subcarp.05, carp.01), y falleció el 27 de abril de 2021 (págs.20-21, doc.02, carp.01).

- Que el señor Jesús Afrany Urán Montoya nació el 27 de abril de 1974 (págs.23, doc.01, carp.01), y el 16 de junio de 2021 solicitó el reconocimiento de la pensión

de sobrevivencia por el fallecimiento de su cónyuge, la pensionada María Isabel Buitrago Arboleda (págs.330-331, doc.02, subcarp.05, carp.01), prestación que fue denegada a través de la Resolución SUB 183997 del 05 de agosto de 2021, aduciendo que “... *el peticionario no acredita convivencia durante los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento de la causante*” (págs.22-27, doc.02, carp.01).

2.3.- PROBLEMA JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si al señor Jesús Afrany Urán Montoya, en su condición de cónyuge supérstite, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia que se causó con ocasión del fallecimiento de la pensionada María Isabel Buitrago Arboleda, efecto para el que habrá que establecer si el misma convivió con la causante durante los cinco (5) últimos años anteriores a la muerte, o en cualquier tiempo, esto es, si acredita las condiciones para que le siga asistiendo el derecho deprecado, pese de haberse separado de hecho?

2.4.- TESIS DE LA SALA

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual el(a) cónyuge con vínculo matrimonial vigente que hubiese convivido con el(a) causante durante un interregno igual o superior a los cinco (5) años, en cualquier tiempo, es beneficiario(a) de la pensión de sobrevivencia, aunque que se hubiere separado de hecho, conforme a la postura adoptada por la jurisprudencia.

Consecuentemente, la sentencia de primera instancia será **confirmada**, en cuanto al reconocimiento de la prestación, pero **revocada**, en cuanto ordenó el reconocimiento de los intereses de mora y **modificada**, únicamente en el sentido de extender la condena en concreto.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

2.5.1.- De la pensión de sobrevivencia

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, vigente para la fecha del fallecimiento de la causante 27 de abril de 2021 (págs.20-21, doc.02, carp.01), establece:

“ARTICULO 47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con la causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (...).”

Sobre el particular, cumple relieves que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene por adocinado que parámetro esencial para determinar quién es el legítimo beneficiario de la pensión de sobrevivientes es:

“... la convivencia -entendida como la comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado” (reiterada en SL4099-2017, SL3818-2020).

También procede memorar que, aunque el órgano jurisdiccional de cierre en principio no diferenciaba, en cuanto a sus requisitos, la pensión de sobrevivientes de la sustitución pensional y, por ende, en cualquiera de los dos casos, exigía una convivencia previa de cinco (5) años, posteriormente varió su criterio, en el sentido de adocinar que:

“... para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado fallecido, no se requiere ningún tiempo mínimo de convivencia, sino que es suficiente acreditar la condición invocada para cumplir

el presupuesto del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por manera que la cohabitación de 5 años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado” (CSJ SL1730-2020; SL4606-2020; SL2222-2021).

Sin embargo, la Corte Constitucional, en sede de tutela dejó sin efecto la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL1730 de 2020, considerando que la postura del órgano jurisdiccional de cierre, es contraria a la Constitución, reiterando que los cónyuges o compañeros permanentes supérstites deben demostrar el requisito de convivencia con el causante, por lo menos durante cinco años continuos, indistintamente de que este último fuera pensionado o afiliado al momento del fallecimiento, por cuanto:

“(i) la simple condición de pensionado no es una razón para establecer una diferencia entre los beneficiarios que integran el grupo familiar de este y del afiliado [...], (ii) la convivencia es un elemento indispensable para considerar que el cónyuge o cónyuge hace parte del grupo familiar del pensionado y afiliado [...], y (iii) la Ley 797 de 2003 sólo modificó el tiempo exigido de convivencia con el pensionado o afiliado, mas no alteró el concepto de beneficiario de la pensión de sobrevivientes [...]” (SU-149 de 2021).

En adición a lo anterior, según lo adoctrinado pacífica y reiteradamente por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, lo que difiere tratándose de cónyuge o de compañero(a) permanente, es la contabilización de los cinco (5) años mínimos de convivencia:

“En efecto, a partir de la sentencia SL, 24 en. 2012, rad. 41637, esta Sala planteó que el cónyuge con unión matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede reclamar legítimamente la pensión de sobrevivientes por su fallecimiento, siempre que hubiese convivido con el (la) causante durante un interregno no inferior a 5 años, en cualquier tiempo.

(...)

De acuerdo con lo anterior, la convivencia de los compañeros permanentes debe constatarse en los cinco años previos al fallecimiento del pensionado o afiliado, puesto que, a diferencia del vínculo matrimonial, cuyas obligaciones personales no se agotan por la separación de facto, en tratándose de las uniones maritales de hecho, la cesación de la comunidad de vida tiene un efecto conclusivo de la unión y de sus obligaciones y deberes personales, y por ende el compañero deja de pertenecer al grupo familiar” (CSJ SL1399-2018, que memora

las consideraciones expuestas en las sentencias SL7299-2015; SL6519-2017, SL16419-2017 y SL6519-2017, y que ha sido reiterada en las Sentencias SL5141-2019; SL1869-2020; SL3693-2021).

De otra parte, respecto de la necesidad de acreditar que los lazos afectivos permanecieron inalterados hasta el momento de deceso del causante, cuando el reclamante es el cónyuge con vínculo matrimonial vigente pero separado de hecho, la jurisprudencia precisó:

“Al respecto, esta Sala ha señalado que la demostración de los lazos familiares y afectivos, en el caso de la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separado de hecho del causante, no es una exigencia prevista en el inciso 3.º del literal b). Lo anterior, en la medida que el texto de tal disposición establece que, en ese evento, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido.

En efecto, esta Corporación tiene adoctrinado que «la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado (...) en un periodo de 5 años», puede ser acreditado «en cualquier tiempo». Ello, en aras de cumplir la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del de cujus, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41673, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019, CSJ SL4047-2019, CSJ SL4771-2020, CSJ SL3850-2020 y CSJ 2746-2020).

Por lo visto, es incorrecto sostener que la cónyuge separada de hecho no tiene la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes pese a que su vínculo matrimonial está vigente.

Acerca de dicha tesis, en sentencia CSJ SL5169-2019, esta Sala explicó que la misma corresponde al verdadero alcance e intelección del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, porque aunado a lo referido anteriormente acerca de su finalidad, «su contenido encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto, esto es, no invisibiliza las diferentes circunstancias que generalmente rodean la dejación de la vida en comunidad entre esposos».

En la misma providencia, la Corte señaló que lo anterior obedece a que: (i) comúnmente, la separación de hecho ocurre por problemas estructurales en las relaciones matrimoniales, que a la larga generan el distanciamiento de los consortes; (ii) tales situaciones son imprevisibles por el legislador; (iii) y, por tanto, el rol del juez consiste en interpretar la norma conforme las particularidades de cada caso, es decir, darle el alcance que corresponda según cada situación que no pudo anticiparse en la ley. Conforme ello, anotó que incluso el artículo 176 del Código Civil, no establece dentro de las obligaciones a los cónyuges, las de mantener los lazos afectivos o familiares hasta el momento del fallecimiento de uno de ellos.

En ese orden de ideas, la ruptura de las relaciones afectivas con una persona con la que se convivió por virtud del matrimonio no es óbice para acceder a la pensión de sobreviviente, más si se tiene en cuenta, que la norma acusada no dispone tal exigencia” (CSJ SL359-2021, que memora las consideraciones expuestas en la sentencia SL5169-2019, y fue reiterada, entre otras, en las sentencias SL2257-2022, SL753-2023)

De consiguiente, esta Corporación colige que al señor Jesús Afrany Urán Montoya, en su comprobada condición de cónyuge superviviente de la pensionada María Isabel Buitrago Arboleda (págs.17-18, doc.02, carp.01), le concernía la carga de probar que convivió con la misma por un periodo igual o superior a los cinco (5) años en cualquier tiempo, y con tal propósito, en el **interrogatorio de parte** expuso que convivió con la causante desde el 20 de noviembre de 1999, y por un espacio aproximado de 13 años, más o menos hasta el año 2013 o 2014; que aunque se separaron, nunca dejaron de verse, se trataban como ‘novios’, e incluso tenían el proyecto de conseguir una vivienda para retomar la convivencia; que durante la época de separación, la causante se fue a vivir con unas hermanas, y él volvió a residir la casa de su madre, pero seguía estando afiliado a salud por cuenta de aquella, quien además reclamaba y le llevaba los medicamentos de control para la hipertensión; que durante esa misma época ninguno sostuvo una relación romántica con terceros; y que no retomaron la convivencia porque consiguió trabajo como conductor de carretera y a ella no le gustaba quedarse sola (desde el minuto 00:07:25, doc.14, carp.01).

Pese a lo anterior, se debe advertir que la declaración rendida por el demandante no tiene la fuerza de convicción para acreditar o desvirtuar la ocurrencia de los hechos objeto de debate, siendo que las mismas no le es dable producir sus propias pruebas, es decir “...*la parte que hace una declaración de un hecho que lo favorece, no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio*” (CSJ SL 24450 del 29-09-2005 SL 24450 del 02-07-2008, SL17191-2015, SL1024-2019, SL3308-2021).

De otra parte, la testigo **Jacqueline Uran Montoya** dijo que conoce al señor Jesús Afrany Urán Montoya porque es su hermano; que aquel vive con ella, otros hermanos, y algunos sobrinos, desde hace más de 14 años, cuando el mismo regresó a la casa materna; que conoció a la señora María Isabel Buitrago Arboleda

porque era la esposa de su hermano; que aquellos estuvieron casados por más de veinte (20) años, y en su entendimiento, nunca se dejaron, siendo que siempre se visitaban, salían de paseo, y estaban pendientes el uno del otro, aunque durante una época no vivieron bajo el mismo techo por problemas personales; que no tuvo conocimiento de que la causante o el demandante hubieren tenido una relación sentimental diferente a la que sostuvieron entre ellos; que desconoce las razones por las que el demandante y la demandante no reanudaron la convivencia; y que su hermano siempre ha trabajado como conductor (desde el minuto 00:21:35, doc.14, carp.01).

En sentido similar declaró la señora **Hilda Cecilia Jaramillo Palacio**, quien manifestó que conoce al señor Jesús Afrany Urán Montoya hace aproximadamente 28 años, porque ha trabajado para él como vendedor y auxiliar de parqueadero en una estación de gasolina, e incluso en la actualidad lo sigue visitando constantemente; que asistió al matrimonio del actor con la señora María Isabel Buitrago Arboleda; y que aquellos siempre se presentaban como esposos, y no les conoció pareja diferente a la que tuvieron entre ellos; que convivieron más de veinte (20) años en matrimonio (desde el minuto 00:02:10, doc.15, carp.01).

A su turno, la señora **María Nelly Saldarriaga de Saldarriaga** aseveró que conoce al señor Jesús Afrany Urán Montoya porque han sido vecinos toda la vida, y conoció a la señora María Isabel Buitrago Arboleda hace diez (10) años porque el actor y su familia se la presentaron como la esposa del demandante; que la causante visitaba la casa materna del demandante cada ocho (8) días; que el demandante se casó con la demandante en el año 1999; que vivieron unos 13 años, y después se separaron, pero durante más de diez (10) años se siguieron viendo, se colaboraban económicamente, con los medicamentos; que no le conoció una pareja sentimental diferente a la señora María Isabel, ni al demandante; y que el accionante trabaja como conductor, y en ocasiones lo mandan de viaje fuera de la ciudad (desde el minuto 00:15:15, doc.15, carp.01).

Adicionalmente, se constata que en el plenario reposa la **investigación administrativa** adelantada por Colpensiones E.I.C.E, a través de la sociedad Cosinte Ltda., y que en la misma se concluyó *“De acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, se estableció que el señor Jesús Afrany Urán Montoya y la señora María Isabel Buitrago Arboleda, convivieron desde el día 20 de noviembre del año 1999 hasta el año 2016 (sin aportar fecha exacta), año en el que se separaron de cuerpos sin volver a convivir”* (págs.49-53, doc.05, carp.01).

Así las cosas, se colige que la prueba recabada en el trámite de la primera instancia, realmente acredita que el señor Jesús Afrany Urán Montoya convivió en matrimonio con la señora María Isabel Buitrago Arboleda, durante un interregno no inferior a cinco (5) años, asistiéndole consecuentemente el derecho de sustituir a su cónyuge en el pago de la prestación pensional reconocida por el acaecimiento del riesgo de la vejez, aunque se hubieren separado de hecho, en la medida en que el vínculo matrimonial se mantuvo vigente; y en glosa de ello, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto declaró que al señor Jesús Afrany Urán Montoya, en su condición de cónyuge supérstite, le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de la pensionada María Isabel Buitrago Arboleda.

De conformidad lo previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, concordado con el artículo 48 ibídem, la pensión de sobrevivencia a reconocer en favor del señor Jesús Afrany Urán Montoya, debe ser igual al 100% del monto de la mesada que en vida disfrutaba su cónyuge, la pensionada María Isabel Buitrago Arboleda, la cual, conforme a lo indicado en la Resolución SUB 32248 del 10 de febrero de 2021, ascendía a un (1) SMLMV (págs.262-267, doc.02, subcarp.05, carp.01).

Así las cosas, Colpensiones E.I.C.E. debe reconocer en favor del demandante la suma de \$28.227.587 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 28 abril de 2021 y el 30 de junio de 2023, debiéndose modificar la sentencia de primer grado, en el sentido de actualizar la condena en concreto, conforme a lo previsto en el inciso 2º del artículo 283 del CGP, en el sentido de indicar que el retroactivo

pensional causado hasta el 31 de julio de 2023, asciende al valor de \$29.387.587, incluidas únicamente las mesadas adicionales de diciembre de cada anualidad, siendo que la prestación primigenia se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011 (parágrafo transitorio 6° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005).

En igual sentido, cumple indicar, que la mesada a reconocer a partir del 01 de agosto de 2023 asciende a la suma de \$1.160.000, y que sobre las mesadas liquidadas como retroactivo pensional no operó el fenómeno extintivo de la prescripción, siendo que desde la fecha de su causación, 27 de abril de 2021 (págs.20-21, doc.02, carp.01), la fecha de su reclamación, 16 de junio de 2021 (págs.330-331, doc.02, subcarp.05, carp.01), y la fecha de radicación de la presente acción, 29 de noviembre de 2021 (pag.03, doc.01, carp.01), no transcurrió el término trienal al que hacen referencia los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Finalmente, se memora que de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, razón por la cual se confirmará la autorización dispensada a Colpensiones E.I.C.E. para descontar los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud del retroactivo pensional adeudado.

2.5.2.- De los intereses moratorios

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé:

“ARTICULO. 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1° de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”

Y por delineamiento jurisprudencial, los referidos intereses:

“... (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de nuevas reglas jurisprudenciales” (CSJ SL3130-2020, SL1019-2021).

Así, en un caso de similares contornos al discutido al interior del proceso de la referencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, precisó:

“Frente al cuarto de los reproches, esto es, la condena por intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, razón le asiste al apelante cuando señala que en el caso bajo estudio no resulta procedente la imposición de intereses de moratorios, como consecuencia del retardo por parte de la entidad en el reconocimiento de la prestación; ello por cuanto la concesión de la pensión de sobrevivientes estuvo fundado en la postura de origen jurisprudencial que adoptó la Sala frente al requisito de convivencia.

En fallo CSJ SL787-2013, la Sala adocrinó que no habría imposición de intereses moratorios cuando «las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley».” (CSJ SL 5141-2019).

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia consultada, en lo que respecta a la condena impuesta por concepto de intereses moratorios, por cuanto el reconocimiento de la prestación estuvo fundado en la postura fijada por la jurisprudencia y solo a partir de la valoración judicial de la prueba es que puede definirse que los cónyuges convivieron por un espacio superior a los cinco años en cualquier tiempo, en su lugar, y como fue solicitado en la demanda, se ordenará la indexación de las mesadas adeudadas, hasta la fecha en que se haga efectivo, para compensar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido desde la fecha en que se hicieron exigibles, y que sufrirán hasta el momento en que se materialice su pago (CSJ SL359-2021).

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E. por habersele resuelto desfavorablemente el recurso de alzada, se fijan como agencias en derecho, en favor del señor Jesús Afrany Urán Montoya la suma de \$1.160.000 que corresponde a un (1) SMLMV, conforme a lo reglamentado por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **MODIFICA** el numeral segundo de la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Jesús Afrany Urán Montoya contra Colpensiones E.I.C.E., únicamente en el sentido de indicar que el retroactivo pensional causado entre el 28 de abril de 2021 y el 31 de julio de 2023 asciende a \$29.387.587.

2.- Se **REVOCA** el numeral tercero de la sentencia de fecha y origen conocidos, y en su lugar, se absuelve a Colpensiones E.I.C.E. de la pretensión referida al reconocimiento y pago de los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 141 de 1993; en subsidio, se ordena la indexación las mesadas adeudadas, desde la fecha su causación y hasta la fecha en que se materialice el pago efectivo.

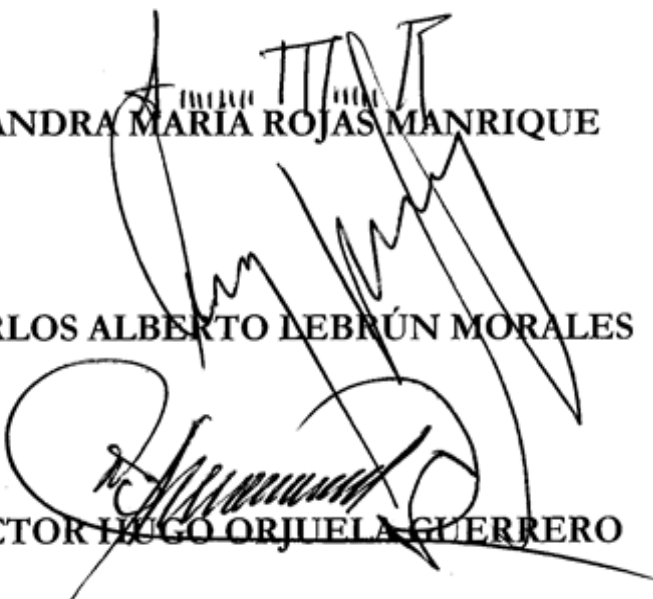
3.- Se **CONFIRMA** en todo lo demás la sentencia de fecha y origen conocidos.

4.- Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E. y en favor de Jesús Afrany Urán Montoya; se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

5.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO